

# UNA LENTA AGONIA

**M**ONTEVIDEO, febrero.—En el casino de Montevideo, la burguesía uruguaya se mezcla con el turismo para dejar sobre las mesas de juego un dinero que cada vez vale menos. Las formas —esas formas que la oligarquía local gustaba tanto de guardar, en su vida social como en la política— se han perdido definitivamente. Y frente a los empleados de lustrados fracs, las gentes formulan sus apuestas en pantalón corto. Fuera, junto a la playa, pasea una pequeña burguesía aburrida, decepcionada; y más lejos, en los barrios, un pueblo derrotado cuenta sus miserias de cada noche.

En Punta del Este —lugar de veraneo para una "tradicional" colonia argentina— estallaron, días atrás, varias bombas. La prensa uruguaya no escribió una palabra sobre ello. Y muy pocos saben, en Montevideo, que el ex general Liber Seregni, última esperanza democrática del país cuando encabezó el Frente Amplio en las elecciones que dieron el triunfo a Bordaberry, había sido detenido y permanece en poder de las Fuerzas Conjuntas sin que sus familiares tengan noticia alguna de él, ni de su paradero, ni de su estado, ni de los presuntos cargos que contra Seregni existan.

Los periódicos uruguayos apenas informan sobre su propio país. Recogen tan sólo noticias autorizadas por una férrea censura, y publican los comunicados oficiales. Todo diario o revista mínimamente crítico ha sido condenado al silencio. Apenas entran publicaciones extranjeras, y los diarios de Buenos Aires, que —sobre todo en esta época del año, verano en este hemisferio— alcanzan gran venta en Uruguay, cuidan de no perder su mercado y evitan que las autoridades militares prohíban su difusión, por el simple sistema de ignorar la realidad no acogiendo en sus páginas más que excepcionalmente la información del vecino país.

Sin embargo, el pueblo uruguayo está perfectamente enterado de la actual "escalada" en la represión que el régimen cívico-militar presidido por Bordaberry ha emprendido. Cada noche, la televisión pone un espacio a disposición

de las Fuerzas Conjuntas para que éstas "informen" de sus actividades; y sobre las páginas de la prensa se suceden diariamente los comunicados policíaco-militares, con fotografía de los nuevos detenidos y procesados.

Desarticulada hace tiempo la organización de los "tupamaros", con sus principales dirigentes en la cárcel sirviendo como rehenes, los

deuda externa, han colocado al país en una difícilísima situación económica, para la que no se vislumbra solución.

Uruguay vive una lenta agonía. Cada uno de los aspectos de la vida nacional se va apagando lentamente, sin ofrecer esperanzas. **"La única solución, tal como vienen las cosas —me comentaba un taxista—, está en ponerse a trabajar**

el capital foráneo apenas acude a tal invitación, pese a las facilidades concedidas para exportar beneficios e inclusive el propio capital. Y, entre tanto, más de cuatro mil presos políticos —no existen cifras oficiales, y ni siquiera se admite que existan "presos políticos"— pudren sus vidas en las cárceles (la más famosa de las cuales se llama, en amarga paradoja, "prisión Libertad"), sin posibilidad práctica de defensa legal, y en condiciones deplorables de alimentación, sanidad y trato, que han causado la enfermedad en muchos de ellos (se han denunciado avanzados estados de tuberculosis de Raymon Cabrera, Ramón Vignoles, Washington Rodríguez...). Las Universidades han sido culturalmente arrasadas, y de la política educativa en curso puede dar idea que el máximo jorjaca de la enseñanza superior, señor Bosch, se autodefiniera tiempo atrás como **"el führer de la juventud del Uruguay"** (1).

Las estructuras demoliberales del Estado uruguayo parecieron, hace ya una década, insuficientes

**para la Policía o el Ejército".** Y no le faltaba razón al hombre, dado que el 53 por 100 del presupuesto nacional uruguayo se destina precisamente al mantenimiento de unas Fuerzas Armadas que, según los expertos, no resistirían una confrontación con ninguno de sus países vecinos, y que, en realidad, están destinadas a la "guerra interna", a la represión, como el cuerpo policial con el que comparten tan elevado monto presupuestario.

**"Seguridad para el desarrollo"** es uno de los lemas acuñados por el Gobierno, ofreciendo la trágica paz de las bayonetas como garantía para el inversor extranjero; pero

centuriones uruguayos han extendido su acción represiva contra todos los demás grupos de oposición al régimen, sin pararse a distinguir demasiado en si éstos propugnan la vía armada o la simple acción política y laboral. La última víctima está siendo el Partido Comunista. Pocos días antes que Seregni, varios de los principales dirigentes del PCU en la clandestinidad —Juan Massera, Vladimir Turiansky, Bleyer, etcétera— habían caído en poder de las Fuerzas Conjuntas. Y en una estación del Metro de Montevideo permanece abierta una exposición con todo el armamento incautado a comunistas que, según la prensa oficialista, **"habría sido enviado hasta aquí desde el Vietnam, tratándose de parte del material abandonado por los norteamericanos al final de la guerra"**.

El miedo político se percibe en seguida —nadie quiere hablar de nada por teléfono, se comenta en voz baja en la calle, se mira en torno en las terrazas de los cafés—, mezclándose con una profunda preocupación por el destino económico del país. Bordaberry y los militares que, amparados por su débil sombra de Presidente electo, dominan el aparato del Estado, han cumplido fielmente la sentencia dictada sobre Uruguay por quienes establecen la división internacional del trabajo: orientarse principalmente a la producción agraria y ganadera, y hacer de la industria un sector complementario. Pero el cierre del mercado europeo a su carne, los aumentos de precios del petróleo y derivados y de los insumos de importación, una inflación constante y el crecimiento de la

## Vicente Romero



"La única solución, trabajar para la Policía o el Ejército". En la foto, Bordaberry.

(1) Publicado en el periódico "El Día" de Montevideo, 19-XII-1975.



Desarticulada hace tiempo la organización de los "tupamaros", los centuriones uruguayos han extendido su acción represiva contra los demás grupos de oposición.

para las ambiciones de importantes grupos oligárquicos, como para el capital internacional controlado por los Estados Unidos. Forzar sus límites para hacerse con el control del aparato de poder y dominar los resortes de la economía nacional significó crear fuertes tensiones sociales y abrir una larga lucha política. En noviembre de 1966, el ejecutivo colegiado se transformaba en una presidencia personal. Nuevas promociones de militares formadas políticamente en academias norteamericanas, reemplazaron a los tradicionales uniformados uruguayos, que tan poca vocación de dominio habían demostrado sobre el poder político. Creció la guerrilla urbana, y su enfrenta-

miento y represión ofreció una ocasión de "protagonismo" a los centuriones. Finalmente, en 1973, los militares ocuparon los principales puestos del aparato estatal; el Parlamento quedaba disuelto, los partidos proscritos y, pese a que se conservara la "presidencia-títere" de Bordaberry, a nadie podía engañar el enmascaramiento con que pretendía ocultarse una nueva dictadura militar en América Latina.

El último domingo de noviembre de 1976 debería ser fecha electoral para Uruguay. En la segunda quincena de enero, un portavoz gubernamental afirmaba que "no habría elecciones" y que el propio Bordaberry dirigiría próximamente una comunicación al país para

explicarlo. Sin embargo, nada se ha establecido oficialmente todavía. Y el Presidente ha remitido a las Fuerzas Armadas un memorándum sobre la situación, para que los verdaderos dueños del poder se pronunciaran.

Pero los uniformados uruguayos no constituyen un bloque monolítico, sino que entre sus filas existen divergencias, pese a su comportamiento unitario. Los observadores han llegado a delimitar tres diferentes corrientes: los **partidarios de llevar la represión hasta sus últimas consecuencias**, teóricos de un ultranacionalismo carril dentro de un sistema corporativista (se señala al general Cristi, jefe de la primera región militar, y al teniente general Vadora, comandante en jefe del Ejército); un segundo grupo de militares "**profesionalistas**", que preconizarían una cierta retirada de las Fuerzas Armadas a un segundo plano, con autorización de los más conservadores partidos políticos y convocatoria de elecciones, cumpliendo así el calendario electoral (generales Eduardo y Rodolfo Zubía, jefes respectivos de las regiones militares segunda y tercera), y una última línea de **centuriones "populistas"**, que desearían la sustitución de Bordaberry por una Junta Militar, para desarrollar una política interior de ayuda a la producción agraria y a los pequeños empresarios, mientras exteriormente se orientarían hacia un tercermundismo "blanco" (general Gregorio Alvarez, jefe de la cuarta región).

Entre tanto, frente a todas estas especulaciones políticas, la dura realidad que define al régimen uruguayo se dibuja así: uno de cada ochenta ciudadanos ha sufrido la tortura (según afirmaciones del ex

senador "blanco" Ferreira Aldunate); 40.000 personas viven en libertad vigilada; desde el pasado octubre, 1.400 detenidos han pasado por las celdas, acusados de "actividades subversivas"; aunque en el país no se escuchan más tiros que los disparados por las Fuerzas Conjuntas; se teoriza sobre las excelencias de la libre empresa, mientras la deuda exterior supera los 1.500 millones de dólares, el coste de vida aumenta continuamente (sobrepasaba el 60 por 100 un par de meses antes de terminar 1975), y los sindicatos, clausurados, libran una difícil resistencia en la clandestinidad; cuarenta y ocho devaluaciones ha experimentado la moneda nacional desde la ascensión de Bordaberry; la balanza comercial resulta deficitaria en 135 millones de dólares, lo que supone más de un tercio de las exportaciones uruguayas... Y el censo revela que la población apenas crece, a la vez que descienden las cifras de habitantes de muchas ciudades; la emigración, forzada tanto económica como políticamente, es una sangría constante. Y cada cierto tiempo, en esta "**seguridad**" que "**para el desarrollo**" han edificado los militares uruguayos sobre diseño yanqui, una familia recibe de las Fuerzas Conjuntas un ataúd lacrado conteniendo los restos de un detenido. Cuantan en Montevideo —lo cuentan en voz baja— que, muchas veces, las gentes no respetan la prohibición oficial de abrir la caja, y hacen saltar los precintos para comprobar que el cadáver es de quien les aseguran. Entonces, los gritos de dolor y espanto aterran al vecindario, cuando esas pobres gentes comprueban las huellas de la tortura sobre el cuerpo de su hijo, padre o hermano. ■



Uno de cada ochenta ciudadanos ha sufrido tortura y hay cuarenta mil personas en libertad vigilada.